



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DE LOS MIEMBROS DE LA CARRERA JUDICIAL POR LA ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO

En Madrid, firmado electrónicamente

REUNIDOS

De una parte, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, p.s., el Vocal Excmo. Sr. Don Rafael Mozo Muelas, nombrado según Acuerdo (n.º 1.3) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 13 de octubre de 2022, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en representación del Consejo General del Poder Judicial según la previsión del artículo 598.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Y de otra parte, la Abogada General del Estado, doña Consuelo Castro Rey, Abogada General del Estado del Ministerio de Justicia, nombrada por Real Decreto 19/2023, de 17 de enero (BOE número 15, de 18 de enero de 2023), actuando en nombre y representación del citado departamento en aplicación de la Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre, sobre delegación de competencias.

Ambas partes se reconocen con capacidad y legitimación suficiente en derecho para celebrar y firmar el presente Convenio de colaboración, y en su virtud,



EXPONEN

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Española establece que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y será presidido por el Presidente del Tribunal Supremo. Asimismo, el artículo 104.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ), dispone que el gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, y su Presidente, de conformidad con los artículos 105, 585 y 598.1.1º de la propia LOPJ, es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo.

Como tal, ostenta la competencia para el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia de condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto de Jueces y Magistrados, en los términos establecidos en el artículo 560.1.16ª de la citada LOPJ.

Que la Abogacía General del Estado, adscrita al Ministerio de Justicia con nivel orgánico de subsecretaría, es el órgano directivo de los servicios de asistencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas, con las competencias y funciones contempladas en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio y en el Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, se regula la inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre su personal.

SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 2 de la citada Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en los términos establecidos reglamentariamente, los Abogados del Estado podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus organismos Públicos y Órganos Constitucionales, cualquiera que sea su posición procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo.

Este precepto legal está desarrollado por el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, que le dedica íntegramente el Capítulo III de su Título III (artículos 46 a 49), bajo el epígrafe "Representación y defensa de autoridades, funcionarios y empleados públicos".

En este sentido, el artículo 14, letra f) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del



Estatuto Básico del Empleado Público, reconoce a los empleados públicos incluidos en su ámbito subjetivo de aplicación el derecho a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.

Ambas partes coinciden en la conveniencia de articular el mecanismo para hacer efectivo este beneficio de asistencia letrada en juicio a los Jueces y Magistrados integrantes de la Carrera Judicial, en el marco de la autonomía institucional de éstos y en los términos legales y reglamentarios que regulan esta asistencia, sin perjuicio de su derecho a designar Abogado y Procurador particular o a solicitar que se les designe uno de oficio.

TERCERO. La colaboración entre ambas instituciones se ha plasmado en la suscripción del anterior Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de representación y defensa en juicio de los miembros de la carrera judicial por el Servicio Jurídico del Estado, firmado el 13 de mayo de 2010 y aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión celebrada el 22 de abril de 2010.

CUARTO. Las partes consideran necesario modificar este convenio y adecuarlo a la legislación vigente, en aras a mantener e impulsar estas líneas de colaboración entre ambas instituciones.

QUINTO. En atención a todo cuanto se acaba de exponer, las dos partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo beneficioso para ambas la colaboración en distintas materias de su competencia, acuerdan suscribir el presente Convenio, que se registrá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. - Objeto

Este Convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración a desarrollar entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia con el fin de que los Jueces y Magistrados integrantes de la Carrera Judicial puedan encomendar su representación y defensa en juicio ante cualquier orden jurisdiccional a los Abogados del Estado, en los supuestos



en que se dirija contra ellos alguna acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos.

SEGUNDA. - Compromisos de las partes

El Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía General del Estado, prestará asistencia letrada en juicio a los Jueces y Magistrados, en los términos, con los requisitos y siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 46 a 49 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, así como en las restantes disposiciones legales o reglamentarias aplicables a esta función desempeñada por los Abogados del Estado.

El Consejo General del Poder Judicial remitirá con carácter urgente, a instancia del Juez o Magistrado interesado, la propuesta razonada de asistencia letrada mencionada en el artículo 46.4 del citado Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, en la que se realizará en todo caso una valoración por parte del Consejo General del Poder Judicial de la concurrencia del requisito de haber actuado el Juez o Magistrado en el legítimo desempeño de sus funciones, a la que deberán acompañarse los antecedentes necesarios, a la Abogacía General del Estado, cuya resolución expresa al respecto deberá ser notificada al órgano proponente.

TERCERA. - Financiación

El presente Convenio no conlleva contraprestación económica para ninguna de las partes, y no podrá suponer incremento del gasto público, debiendo la Abogacía General del Estado cumplir las prestaciones establecidas en el mismo con sus disponibilidades presupuestarias ordinarias.

No obstante, el Consejo General del Poder Judicial asumirá la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera de los gastos y contrataciones adicionales que fueran precisas para la defensa de los Jueces y Magistrados en los procedimientos judiciales en el extranjero, en los que por la Abogacía General del Estado se haya habilitado su representación y defensa, de acuerdo con lo previsto en los artículos 46.7, 31.5, 43.4 y 44.5 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

CUARTA. - Comisión Mixta de Seguimiento

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este Convenio, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, designados conforme a sus



respectivas normas institucionales. Su presidencia corresponderá alternativamente, por períodos anuales, a cada una de las dos partes intervinientes.

La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previa convocatoria de su Presidente y, al menos, una vez al año, para examinar los resultados de la cooperación realizada.

La Comisión podrá recabar informes sobre las medidas, resultados e incidencias que se produzcan en relación con el objeto del presente Convenio y ejercerá las siguientes funciones:

- a) Realizar el seguimiento de las asistencias prestadas en ejecución del presente Convenio.
- b) Estudiar y proponer, en su caso, las posibles revisiones de los compromisos asumidos.
- c) Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la más adecuada consecución de los objetivos del Convenio.
- d) Interpretar el Convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.

Esta Comisión es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.

QUINTA. - Vigencia y eficacia del Convenio

El presente convenio, que se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes mediante su firma, tendrá una vigencia de cuatro años contados a partir del momento de su firma.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, mediante acuerdo expreso de las partes a través de un documento conjunto o escrito unilateral comunicado recíprocamente.

Este Convenio deroga el convenio suscrito anteriormente entre ambas instituciones el 13 de mayo de 2010.

SEXTA. - Modificación, resolución y extinción del Convenio

El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes a través de la suscripción de la correspondiente Adenda modificativa



que deberá ser suscrita por las mismas Autoridades que el presente Convenio.

Son causas de resolución:

- a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
- b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
- c) La denuncia del Convenio cuando se estime que se han producido alteraciones sustanciales en las condiciones en las que ha sido suscrito.
- d) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno/a de los/las firmantes.
 - 1. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de dos meses con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.
 - 2. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
- e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
- f) Por causa de fuerza mayor que imposibilite el objeto del Convenio.
- g) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.

La resolución del Convenio no afectará a la finalización de las actividades que estuvieran en ejecución, para las que la Comisión Mixta de Seguimiento establecerá un plazo improrrogable de finalización.

SÉPTIMA. - Protección de datos

Los datos personales que se recogen en el presente Convenio, y los que se deriven de su ejecución serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio. Ambas partes se comprometen a tratar los



mismos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y demás normativa de desarrollo, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, y los demás previstos en la legislación aplicable, en la dirección correspondiente a sus respectivas sedes en cada momento *en el caso del Consejo General del Poder Judicial, a través del formulario web accesible en <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Proteccion-de-Datos/Ejercicio-de-derechos--formulario-/>*. En el caso de la Abogacía General del Estado, a través de la siguiente dirección de correo electrónico: dpdagedsje@mjusticia.es

OCTAVA. – Confidencialidad

Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente Convenio. Ambas partes también acuerdan no divulgar esta información a ninguna persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta ejecución de este Convenio.

El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de este Convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.

Todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento, por ambas partes, en atención a su propia naturaleza, de las obligaciones de publicidad y transparencia derivadas de normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

NOVENA. - Régimen Jurídico

El presente convenio no tiene por objeto prestaciones propias de los contratos y por ello tiene naturaleza administrativa.

Las controversias a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del contenido del presente Convenio que se solucionarán de común acuerdo por las partes en la Comisión Mixta de Seguimiento.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio, por duplicado, en el lugar y la fecha indicados ut supra.



**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL,
P. S., EL VOCAL**

**LA ABOGADA GENERAL DEL
ESTADO**

Fdo: Rafael Mozo Muelas

Fdo.: Consuelo Castro Rey

